

**La coca
y las economías
de exportación
en América Latina**

Hermes Tovar Pinzón

Roger Rumrill

Gerardo Lovón Zavala

Róger Cortez Hurtado

Bernard Lavalle

Charles Walker

Emilio Garzón Heredia.

SERIE: CURSOS DE VERANO

La coca y las economías de exportación en América Latina
primera edición, abril 1993

© Hermes Tovar Pinzón

© de la presente edición:

Universidad Hispanoamericana Santa María de la Rábida

ISBN: 84-8010-017-6

DL: GR-463-93

Imprime: Graficas Anel
Albolote (Granada)
España

Hecho en España

El narcotráfico en el Perú Penélope en el valle del Huallaga

Roger Rumrill
Instituto de Estudios Amazónicos
Lima

MIRANDO el encapotado cielo invernal, los campesinos productores de coca en el valle del Huallaga (el mayor productor mundial de coca con más de doscientas mil hectáreas) declaran: «hemos visto esos toco-tocos volar muy bajos en las noches arrojando unas pastillitas sobre nuestros cocales».

Onomatopéyicos, los campesinos del valle del Amazonas nominan a las cosas por sus sonidos. Por tanto, los toco-tocos son los helicópteros de la Drug Enforcement Administration (DEA) con base en Santa Lucía, la mayor base antidrogas de América del Sur.

Verdaderas o imaginarias, lo cierto es que las «pastillitas» de que hablan los campesinos cocaleros del Huallaga están provocando el mayor impacto que alguna vez haya ocasionado «la guerra contra las drogas» en el Perú que se inició el ciclo en 1970: la marchitez, la sequía de los cocales.

Desde principios de 1990 empezamos a recoger los primeros testimonios sobre este fenómeno. Campesinos de Uchiza, de Tocache, de Aucayacu, de Paraíso, repetían preocupados: «nuestra coca se está

secundo». Se escucharon, entonces, las primeras denuncias contra la DEA por la presunta utilización del herbicida Spike, cuyo posible empleo había sido estudiado por una comisión técnica integrada por estadounidenses y peruanos desde 1988.

A mediados de 1991 ya no quedaba ninguna duda. Un estudio realizado por el Ingeniero Enrique Arévalo Gardini, de la Universidad Nacional de la Selva (Tingo María) ha revelado que la marchitez y sequía de los cicales es producida por un hongo muy agresivo, el *Fusarium oxysporum* que ha resultado más efectivo que toda la parafernalia militar y policial que durante los últimos 20 años convirtió, particularmente al Alto Huallaga, en el valle de la violencia y la muerte en el inútil propósito de erradicar a la coca y los cocales.

La marchitez de los cicales, el cerco asfixiante tendido sobre los productores de coca y pasta básica de cocaína por la DEA, la DIPOD (Policía Peruana de Drogas), la guerrilla y otros agentes de violencia, la caída sin remedio de los precios de la droga en las áreas de producción, está haciendo «desaparecer» el Alto Huallaga como espacio estratégico de la droga y la subversión en el Perú.

La virtual desaparición estratégica del Alto Huallaga configura un nuevo mapa de la droga a fines de 1991 y sus impactos e implicaciones son de orden regional, nacional e internacional.

El primer impacto tiene que ver con la misma región del Huallaga. Los productores afectados en sus plantaciones por el hongo, no se cruzan de brazos. Como la «doctrina Fujimori» de octubre de 1990 y el Convenio Antidrogas entre el Perú y Estados Unidos de mayo de 1991 no se han traducido en ninguna medida concreta, económica y social, los campesinos sólo tienen un producto para sobrevivir: la coca.

En consecuencia, a la primera señal de la llegada del hongo, el campesino emprende las de villadiego en busca de otros valles, de nuevas tierras para sembrar coca. Hasta que éstas también sean infestadas por el *Fusarium* y el éxodo prosiga con un enorme costo social para el campesino y ecológico para el complejo y delicado ecosistema amazónico.

El efecto de este éxodo es impresionante: el valle del Alto Huallaga se está vaciando. Este vaciamiento demográfico y

desparramamiento de la coca hacia el Medio y Bajo Huallaga, a la vez, tiene múltiples consecuencias.

En primer lugar, significa la desaparición del Alto Huallaga como ámbito y espacio estratégico de la droga y de la subversión. El desparramamiento de la coca implica, asimismo, la cocalización masiva de la Amazonia y, por tanto, el esparcimiento de ese hongo político que es la guerrilla.

El segundo impacto tiene que ver con la estrategia antidrogas peruano-estadounidense diseñadas en la llamada «doctrina Fujimori» y en especial en el cuestionado Convento Antidrogas suscrito por los gobiernos de Fujimori y Bush, en mayo de 1991.

Los objetivos de la estrategia diseñada en ambos documentos privilegian el Alto Huallaga como el área para el combate contra la subversión de Sendero Luminoso y contra el narcotráfico. Al desaparecer el Alto Huallaga como el foco del narcotráfico y la guerrilla, la estrategia tiene que reformularse en todas sus partes. Sobre todo porque en la Amazonia Peruana ahora existen varios «Altos Huallagas».

El tercer impacto tiene que ver fundamentalmente con las relaciones internacionales del Perú, principalmente con Estados Unidos.

La negociación del problema de la droga con Estados Unidos se parece al manto de Penélope: fue tejida casi en secreto, ardua y laboriosamente. Pero con el hongo *Fusarium oxysporum*, alguien está comenzando a destejer ese manto.

Esta negociación conducida por el representante personal del Presidente Alberto Fujimori en el tema del narcotráfico, Hernando de Soto, condujo al Perú a ser considerado como un «socio privilegiado» por el Presidente George Bush cuando éste recibió en la Casa Blanca a Fujimori, en septiembre de 1991.

En otras palabras: la relación privilegiada del Perú con la primera potencia mundial se sustentaba en un asunto prácticamente excluyente de otros intereses: la droga.

Y si este interés desaparece, al desaparecer el Alto Huallaga, al secarse los cocales de la Amazonia, al ser desplazada la coca peruana por la producción de la coca ipadú del Brasil y la coca producida en la frontera argentino-boliviana, al ser sustituida la coca por la amapo-

la, desaparecerá también la condición de «socio privilegiado» de la potencia mundial del Norte que el Presidente Fujimori ha usado como «ábrete sésamo» para la reinserción del Perú en el sistema financiero internacional y como canto de sirena para atraer los avaros recursos de la inversión extranjera.

Y si este hongo es realmente el más pequeño pero más poderoso y devastador agente de la guerra bacteriológica emprendida por Estados Unidos contra la coca, estaríamos frente a la versión de una Penélope increíblemente imaginativa, sagaz y perversa, capaz de convertir en un infierno la tierra prometida de los pobres del Perú.

La tierra prometida

Al inicio de la década del 70 el valle del Alto Huallaga fue la nueva tierra prometida del Perú. El censo de junio de 1972 estableció una población de aproximadamente 200.000 mil habitantes con una tasa promedio de crecimiento que entre 1961 y el censo del año 1972, había sido de 10,35%, posiblemente una de las más altas en el país. De esta tasa de crecimiento, sólo el 2,80% correspondía al crecimiento vegetativo, mientras 7,35% se debía a la inmigración.

En realidad, el valle ya era en 1970 uno de los más estudiados del país en toda su potencialidad. En 1962, el Servicio Cooperativo Interamericano de Fomento, de los Estados Unidos, había efectuado un exhaustivo estudio agrológico del valle, clasificando los suelos de acuerdo a su origen y posición fisiográfica en suelos aluviales recientes de terrazas bajas, aluviales en terrazas altas, residuales en laderas y cimas de cerro y suelos hidromórficos.

Un diagnóstico socio-económico de la colonización Tingo María-Tocache-Campanilla que realizó el Centro Nacional de Capacitación e Investigación para la Reforma Agraria (CENCIRA), entre 1971 y 1972, calculó que la inversión financiada por el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) y el Estado peruano ascendía a 41.018,59 dólares que se había gastado en asentar 3.794 colonos organizados en cooperativas agrarias de producción y servicios. Aunque la meta había sido asentar 4.227 familias, cada colono significó una inversión de 10.811,37 dólares, un equivalente a 418.400 soles en moneda nacional de ese entonces. Esta inversión por colono no incluía el costo de construcción de la Carretera Marginal de la Selva, porque sumado

este costo, la inversión por cada asentamiento ascendía a 12.208,24 dólares.

En septiembre de 1972 una misión técnica de PNUD-ILPES, integrada por Víctor Volski, director del Instituto de Estudios para América Latina de la Academia de Ciencias de la URSS, y por los expertos Henri Méot e Ignacio Sachs, este último actual director de la Ecole des Hautes Etudes en Sciences Rurales, de París, visitaron el valle del Alto Huallaga, especialmente el centro de servicios de la colonización, Aucayacu, y ratificaron sobre el extraordinario potencial y posibilidad de la zona. Pero también detectaron los primeros síntomas que podrían hacer de la tierra prometida un infierno.

«Tres cosechas al año, sin rotación de cultivo (arroz, arroz y arroz; o frijol, frijol y frijol; o maíz, maíz y maíz), sin nociones sobre enriquecimiento de tierras, sin abonos ni fertilizantes, tienen lógicamente que destruir la feracidad de la mejor tierra del mundo», advirtió Volski en una conferencia que pronunció ese año en Lima, en la sede del CENCIRA.

Testimonios

Durante todo el mes de julio de 1975 recorrí el Alto Huallaga. Dialogué con decenas de colonos, pero sobre todo con Sixto Leandro Blas, Gaudencio Príncipe y Juan Rojas Jorge.

Sixto Leandro Blas nació en Yauyos. Tenía en 1975 cuarenta años, pero aparentaba mucho más. No era para menos: había sido obrero de construcción civil en Lima, promotor de una cooperativa de colonizadores en el valle, colono en el bolsón de Uchiza desde 1968. Antes de partir a la selva, el «paraíso terrenal» como le dijeron en Lima, enajenó todos los bienes que tenía sobre la tierra y reunió 20 mil soles. Con ese dinero y sus ilusiones partió a Uchiza.

En 1975, Sixto Leandro Blas ya tenía 5 hijos, dos hectáreas de yucas y plátanos y sobre todo una deuda con el Banco de Fomento Agropecuario, como se llamaba en ese tiempo al Banco Agrario. Había sido dirigente de la cooperativa de servicios «La Marginal» e intentaba formar una cooperativa agraria de producción, sin mucho éxito. Al borde de su chacra, a poca distancia del pueblo de Uchiza, me dijo con un tono de rebeldía y frustración:

-¡Qué mala pata! Si hubiera tenido el defecto de pensar individualmente, sólo para mí, quizás sería un camionero o un comerciante lleno de plata.

Gaudencio Príncipe era por esos años un hombre parco, casi hermético. Rey autárquico en su chacra, había tenido todo lo que quería: yucas, plátanos, frutas, gallinas, cerdos y una vida sosegada que se iniciaba en su tambo y terminaba en el límite de su chacra.

-Pero un día llegó la colonización y me dijeron que mi chacra era una zona de expansión urbana. Un tiempo después me dijeron que por mi chacra pasaría la Carretera Marginal. Entonces cortaron los árboles frutales, cortaron las yucas, los plátanos y me quedé sin chacra y también cortaron mis ilusiones de una vida mejor-, me dijo.

Juan Rojas vivía en 1975 en Río Frijol. Había sido comunero en Tapo, Tarma, y desde allí llegó en 1971 al valle del Huallaga.

-He estado en el ejército y un día les dije a mis compañeros: nos dan una comida de perro, hay que rebelarse. Me castigaron y me acusaron de guerrillero porque me encontraron leyendo un folleto sobre Hugo Blanco. Cuando llegué al Río Frijol, tenía muchas esperanzas. Al sortearse las parcelas, a mí me tocó una bien alejada y el suelo no quería producir nada. Tengo 50 hectáreas de tierra arcillosa. Estoy a 27 kilómetros de distancia de la carretera y cuando cosecho algo no puedo sacarlo a ninguna parte-, dijo.

La mayoría de las promesas formuladas a los colonos nunca se cumplieron. Nunca hubo crédito suficiente y oportuno para sus siembras; el sistema de comercialización para la producción no funcionó jamás y muy pronto fueron atrapados por la red de intermediarios; los servicios de salud, educación y transporte que les habían ofrecido no llegaron a organizarse eficientemente y en vista de estas deficiencias, las cooperativas comenzaron a desintegrarse y los colonos a desertar.

Luego de once años de experiencia, la colonización Tingó María-Tocache-Campanilla se desintegró como resultado de una contradicción fundamental: considerar la colonización como un parche de una realidad crítica, y no como un programa articulado a un proyecto de desarrollo regional y nacional.

A su derrumbe contribuyó el inicio de un nuevo ciclo de crisis económica y la inserción del Perú en un nuevo ciclo de la droga, como

productor de hoja de coca para la producción de cocaína. Las condiciones edafoclimáticas eran ideales para esta producción, lo mismo que la crítica situación social y económica de los campesinos. El Alto Huallaga asoma como el nuevo paraíso de la droga.

El paraíso de la droga

En 1975, el fracaso de la colonización Tingo María-Tocache-Campanilla y la creciente demanda de la cocaína en el mercado norteamericano se dan la mano para una rápida, geométrica expansión de la coca en el valle. Entonces, como había ocurrido desde 1966 con la firma entre el BID y el Ministerio de Agricultura para la colonización y la construcción de la Carretera Marginal durante el primer gobierno del Presidente Fernando Belaúnde Terry, el Alto Huallaga es otra vez la tierra prometida de los pobres del Perú.

El fenómeno migratorio no tiene precedentes en este período en la Amazonia Peruana, en particular en la Selva alta, en el eje del Alto Huallaga. En 1940 la población de la Selva Alta del Perú era sólo de 245.645 habitantes. Cuarenta años después, en 1981, llegaba al 1.2111.351 habitantes.

La expansión de la coca seguía el mismo ritmo del crecimiento poblacional. Una comisión Investigadora del Narcotráfico del Senado del Perú, estableció que en 1980 había 17.862 hectáreas de coca legal en el Perú. La ilegal alcanzaba 50.000 hectáreas. De este total, posiblemente 10.000 hectáreas estaban en el Alto Huallaga.

El 17 de abril de 1986 entrevisté en la ciudad de Tarapoto (Huallaga Central) a una delegación de autoridades del pueblo de Tocache, integrada por el Presidente del Frente de Defensa de los Intereses del Pueblo, José Jara, el Subprefecto de la provincia, Oliverio Guzmán Ruíz y el teniente alcalde del pueblo de Tocache, Santos González Ruíz, y me dijeron que en el Alto Huallaga había una superficie de 195.000 hectáreas de coca. Después de los 80, el valle del Huallaga se había convertido en la capital mundial de la coca, produciendo el 65% de toda la cocaína que se consume en los Estados Unidos. Por este tiempo, la Empresa Nacional de la Coca (ENACO), el ente estatal de la coca, ya no podía comprar un solo kilo de coca en el valle porque alguien se lo impedía: la guerrilla de Sendero Luminoso que se había asentado despacio pero sin pausa en el valle,

ganando «bases de apoyo» entre los campesinos sembradores de coca a los cuales organizó y defendió de la violenta persecución de las fuerzas del orden del Perú, apoyadas por la policía antinarcoóticos de Estados Unidos, la DEA. En este período la guerrilla dinamitó los últimos intentos sociales y económicos por contener la expansión cocalera a través del Proyecto Especial Alto Huallaga (PEAH).

El imperio de la coca reina a sus anchas a partir de los 80. La economía peruana se narcotiza con los 800 mil millones de dólares que genera el narcotráfico y que se blanquean en el mercado paralelo del jirón Ocoña, en Lima, especie de «Wall Street» criollo.

Uchiza y Tocache, capitales mundiales del narcotráfico, nadaban en una fiesta de dólares sucios y los polvorientos pueblecillos nacidos a la orilla de la Marginal después de los 60 con la colonización, Progreso, Pucayacu, La Morada, Pucate, Piura, Paraíso, cobran una vida violenta, clandestina y lujuriosa.

Hasta el 18 de agosto de 1989. Ese día los sicarios asesinan al candidato liberal Luis Carlos Galán y el Presidente Virgilio Barco decreta una guerra sin cuartel a los barones de los cárteles de Cali y Medellín. Una guerra que ha hecho tambalear el imperio de la droga, desarticulando su sistema de producción, transporte y comercialización, provocando el derrumbe de los precios de la coca en las zonas de producción y la peor crisis económica y social de la década en el Alto Huallaga y otras áreas cocaleras de la Amazonia Peruana, articuladas al narcotráfico.

Sendero hacia el paraíso

Desde los inicios de la década del 80 ha existido una relación técnica y estratégica entre los campesinos cocaleros, el narcotráfico y las guerrillas de Sendero Luminoso y el Movimiento Revolucionario Túpac Amaru (MRTA).

El año 1983 Sendero Luminoso decide, siguiendo su plan de «Conquistar bases de apoyo» establecerse en los valles cocaleros de la Selva Alta, en especial en el estratégico valle del Alto Huallaga. El órgano oficioso de esta guerrilla, «*El Diario*», en su edición número 581 de febrero de 1990, haciendo un recuento y balance de sus operaciones en la región, anota: «En dicha zona, aparte del olvido estatal y la efervescencia del campesinado, existían condiciones

precisas para desarrollar contingentes de amplia movilidad y poder de fuego».

¿Cuáles eran esas condiciones precisas? En primer lugar, el enfoque y la concepción represiva de la lucha antidrogas del Estado peruano, inspirada doctrinariamente por la Drug Enforcement Administration (DEA) de Estados Unidos. En virtud de este enfoque, que soslayaba los factores sociales, económicos, políticos y culturales de la problemática de la coca, el objetivo central de la lucha debería ser la erradicación y eliminación de los sembríos de coca y, por tanto, la persecución de los campesinos productores de la hoja.

Para aplicar esta estrategia de corte militar-policial, el Estado dictó en 1988, durante el gobierno del general Morales Bermúdez, el decreto ley 22095 inspirado en la legislación extranjera sobre el tema y en convenios internacionales y, por tanto, una ley punitiva, compulsiva, una «camisa de fuerza» legal que no se compadecía con la compleja realidad socioeconómica y cultural del Perú y de los productores de coca.

Simultáneamente a la compulsión legal el Estado creó un aparato policial, la Unidad Motorizada de Patrullaje Rural (UMOPAR), entre otros instrumentos policiales, que aún después de su desaparición es recordada por los campesinos por la comisión de abusos y violencia represiva que desató en la zona mediante temibles operativos. Uno de ellos, llamado «Verde Mar», ejecutado en abril de 1980 fue particularmente sangriento. Los campesinos también recuerdan, entre muchos otros, la operación «Halcón Rojo», a cargo de la Dirección contra el Tráfico de Drogas de la Policía de Investigaciones del Perú (DINTID) por su inusita dureza, un año antes.

El accionar policial-represivo, que castigaba sobre todo a los campesinos cultivadores de coca y entre éstos, a los más humildes, fue generando, primero una soterrada hostilidad y luego una abierta resistencia y confrontación contra el Estado por parte de un campesinado que, desde 1970, venía siendo expoliado y agredido por la mafia del narcotráfico pagando precios irrisorios por la hoja de coca e, incluso, asesinando a los productores a través de los sicarios.

En este contexto de violencia que provenía del Estado, del narcotráfico y de otros agentes, la posibilidad de «Conquistar bases de apoyo» por parte de Sendero Luminoso eran inmejorables. Luego

de establecerse en Tingo María y otras poblaciones menores, iniciaron un programa de trabajo ideológico y de organización de las «bases de apoyo», erigiéndose en muy poco tiempo en la principal fuerza político-militar que reivindicaba los intereses de campesinos contra la erradicación de la coca y el pago de precios adecuados de la hoja y la pasta básica, enfrentando política y militarmente al Estado y a las bandas del narcotráfico.

Hubo además otras condiciones precisas que facilitaron el asentamiento y consolidación de Sendero Luminoso en el Alto Huallaga. Una de éstas fue la inexistencia de organizaciones y gremios campesinos en la zona, fraccionados o extinguidos con el fracaso de la Colonización Tingo María-Tocache-Campanilla.

En una realidad social como la del Alto Huallaga, con campesinos desengañados por la experiencia colonizadora de los años 70, hostilizados con saña por el Estado y sojuzgados por la mafia, productos de una migración aluvional y sin identidad regional, los cocaleros del Alto Huallaga encontraron en Sendero no sólo un aparato militar que los defendía de la violencia policial y los abusos de la mafia, sino también una ideología y una praxis políticas.

Por el contrario, en el valle del Huallaga Central, el continuo geográfico del Alto Huallaga, la experiencia organizativa y gremial de los campesinos ha sido más temprana, más duradera y sólida, precisamente allí donde Sendero ha tenido y tiene dificultades de penetrar.

En efecto, ya desde 1970 surgió en el Huallaga Central una primera organización de productores de tabaco. Con este primer antecedente, se constituyó en 1972 la Federación Agraria Selva Maestra (FASMA) y ese mismo año emergió el Sindicato Unico de Trabajadores de la Educación del Perú (SUTEP), con bases en todo el país y la primera fuerza política de oposición del gobierno militar del general Velasco Alvarado.

Por los años 1974, Tarapoto, Lamas y otras ciudades del Huallaga Central conocen el surgimiento de fuerzas políticas de izquierda como el Movimiento de Izquierda Revolucionaria (MIR), el troskista Partido Socialista de los Trabajadores (PST) que disputan la hegemonía sindical del APRA, el partido de Haya de la Torre que, ese mismo año, es desalojado de la dirección del SUTEP por una fuerza política emergente: Patria Roja.

Un momento clave del proceso político de estos años en el Huallaga Central tiene lugar en 1975 cuando se organizan los Frentes de Defensa de los Pueblos (FEDIP), proceso que tiene su punto culminante una década después, en 1986, con la formación del Frente de Defensa de San Martín, un frente de clases que en el plano político representa el mayor y más fuerte antagonista de Sendero porque le cuestiona su opinión de «guerra popular» en camino a una «República Popular de la Nueva Democracia» desde la democracia representativa y burguesa.

El decenio de 1970 a 1980, que marca la entronización de Sendero en el Alto Huallaga y un proceso de maduración de la organización gremial campesina y popular urbana en el Huallaga Central con base en Tarapoto, está caracterizado en lo económico a nivel regional por la definitiva cocalización de la economía y, por tanto, la profundización de la crisis de la agricultura regional.

En la década siguiente, las condiciones precisas siguen siendo aún más favorables para el desarrollo de Sendero. En 1985, el MRTA que había intentado sentar bases de operación en el Alto Huallaga, disputándole a Sendero sus bastiones de Uchiza y Tocache, es arrojado del valle a sangre y fuego por las huestes del Presidente Gonzalo, el omnipresente líder senderista.

Aplicando mecánicamente su estrategia militarista, el gobierno del Presidente Belaúnde declaró en septiembre de 1984 y en diciembre de 1985 como «zonas de emergencia» las provincias de Leoncio Prado, en Huánuco, y la de Mariscal Cáceres, en San Martín, atizando aún más la convulsión política, militar y social en la zona.

Entretanto, la guerrilla de Sendero empezó, continuando con su «Gran Plan de Desarrollar Bases de Apoyo», a constituir Comités Populares en las «zonas liberadas», implantando un tipo de economía basada en la sustitución de un tercio de los cultivos de coca por sembríos de panllevar. En esta etapa surgen las columnas del llamado Ejército Popular. Precisamente una columna de 200 guerrilleros ataca el 11 de abril de 1987 el pueblo de Tocache, tomándolo.

Entre abril y septiembre de 1987, fecha en que las fuerzas del orden recuperen Tocache, Sendero instituyó un «nuevo orden» en la provincia. Los «ajusticiamientos» de policías, drogadictos, sicarios, homosexuales y prostitutas se produjeron por decenas. Una suerte de

fundamentalismo moralista, aplicado sangrientamente por ayatolas maoístas tropicales, se impuso en la región.

Después de una década de la «guerra popular» senderista para demoler el Estado, el Alto Huallaga tiene para la guerrilla senderista un valor estratégico. En su edición número 598 del 8 de febrero de 1991, *«El Diario»*, sostiene lo siguiente: «La región del Huallaga y sobre todo el Alto Huallaga, es estratégica y de importancia mayor cada día; no sólo por sus ingentes riquezas potenciales en particular, cuya depredación hace años proyecten el Banco Mundial, el BID y empresas imperialistas coludidos con la gran burguesía y el Estado peruano sino principalmente por la pujanza con que en ella se desarrolla la guerra popular».

La enorme importancia estratégica que tiene para Sendero el valle del Alto Huallaga está claramente definida en el informe del Comité Central con ocasión del X Aniversario de la Guerra Popular, que dice: «La situación de la Región del Huallaga plantea el problema fundamental de la intervención del imperialismo yanqui; esta cuestión encierra en perspectiva que la contradicción nación-imperialismo devenga principal, imprimiendo un cambio sustancial al desarrollo de la guerra popular en el Perú».

Para Sendero Luminoso, en el Alto Huallaga están los gérmenes más desarrollados del Nuevo Estado constituidos, según el órgano oficioso de la guerrilla maoísta del 11 de julio de 1991, por «cientos de Comités Populares Abiertos» donde ya funciona, de acuerdo a la misma fuente, una nueva economía basada en el «principio de autoabastecimiento, el trabajo colectivo enmarcado dentro de las necesidades propias de la guerra popular».

En esta nueva economía cuyo eje es el autoabastecimiento de productos alimenticios como la yuca, el plátano, la pituca, el cacao, etc..., los Comités senderistas pretenden que la economía dependa cada vez menos de la comercialización de la coca y del narcotráfico planteando, además, el intercambio de productos de diversos pisos ecológicos que recoge la experiencia de articulación e intercambio productivo entre los Andes y la Amazonia de hace muchos siglos.

El paraíso perdido

El 18 de agosto de 1989 tuvo lugar, a miles de kilómetros del valle del Alto Huallaga, un acontecimiento que modificó el mapa de la droga y de la guerrilla en los valles amazónicos articulados al narcotráfico: el asesinato del político liberal colombiano Luis Carlos Galán.

Pocas horas después, el Presidente de Colombia de ese entonces, Virgilio Barco Vargas, decretó una guerra sin cuartel a los cárteles de la droga de Cali y Medellín. El impacto de esta guerra fue inmediato en el valle del Alto Huallaga y otras áreas cocaleras. De la noche a la mañana, en el curso de pocos días, los precios de la pasta básica de cocaína y del clorhidrato de cocaína se derrumbaron a niveles de colapso. De dos mil dólares que se había vendido el kilo de pasta básica en la primera quincena de agosto, el precio había caído a 400 dólares a fines de septiembre.

La ofensiva militar asestó, en los días iniciales de la guerra, demolidores golpes a uno de los eslabones más vulnerables del narcotráfico: el transporte. Ello explica que en los días subsiguientes al 18 de agosto, el flujo de avionetas en el Alto Huallaga casi se cortó, a una o dos por día, de un promedio de cuarenta vuelos cotidianos. Como consecuencia, el transporte y las ventas de pasta básica y de clorhidrato se redujeron casi a cero, provocando una crisis que abarcó lo económico, lo político y lo social.

Se produjo, entonces, una brusca modificación en el mapa de la droga y de la guerrilla, ambos fenómenos táctica y estratégicamente articulados.

Hasta las vísperas del 18 de agosto, los poblados de Uchiza y Tocache, ambos en el valle del Alto Huallaga, se habían erigido desde los inicios del ciclo en 1970, en los centros claves de las transacciones del narcotráfico en las fases de producción de la materia prima, la hoja de la coca, la transformación en pasta básica y lavada, la distribución y comercialización de insumos químicos y otras actividades económicas y comerciales conexas.

Pero la desarticulación del sistema de transporte que la guerra de Colombia ocasionó en el narcotráfico paralizó el mercado de transacciones y, poco tiempo después, se quedaron virtualmente aisladas cuando el narcotráfico, con sorprendente capacidad de adaptación y

respuesta a nuevas realidades, descubrió nuevas rutas y otros centros de acopio y comercialización de la cocaína.

Hubo además otro impacto que afectó severamente la economía de Tocache, Uchiza y todo el Alto Huallaga. La guerrilla de Sendero Luminoso, asentada fuertemente en el valle, para legitimar y consolidar su relación política con el campesinado, intentó controlar el derrumbé de los precios de la droga, fijándolos por encima del mercado local. Al no conseguir su cometido, primero amenazó y luego eliminó a los «traqueteros» (comerciantes que desafiaron las «leyes» de la guerra senderista).

Las duras represalias guerrilleras contra los compradores de droga provocaron el desbande de éstos con dirección a otros valles en especial el Huallaga Central. Sumado esto a la casi paralización de la actividad económica y al masivo éxodo de campesinos cocaleros en busca de otras alternativas a los deprimidos precios de la hoja de coca y de la pasta básica, hicieron posible que en el corto plazo de solo algunas semanas el mapa de la droga cambiara, erigiendo a Juanjui, en el Huallaga Central, como la nueva capital del narcotráfico en el Perú. La guerrilla de Sendero Luminoso sigue la ruta de la droga.

Epílogo

El Perú por segundo año consecutivo ha recibido en 1991 la incómoda y desventurada calificación de ser el país con el mayor número de personas desaparecidas. Como tal, está en la línea de mira de todas las organizaciones mundiales de derechos humanos.

Esta es una de las razones por las cuales el Congreso estadounidense congeló, en octubre de 1991, la ayuda de 94 millones de dólares acordada en el Convenio Antidrogas. Como las causas que obligaron a la congelación no han desaparecido, pese al mea culpa del Presidente Fujimori y a sus reiteradas declaraciones de respeto a los derechos humanos en las áreas conflagradas por la guerra y el narcotráfico, el gobierno estadounidense ha dejado en observación la ayuda económica hasta el mes de febrero de 1992.

Entretanto, el gobierno del Presidente Fujimori ha declarado una acrimoniosa guerra verbal a los organismos de derechos humanos que censuran su política sobre la materia y ha promulgado, el 8 de noviembre de 1991, la Ley de Bases de la Estrategia Integral de

Desarrollo Alternativo para Erradicar el Tráfico Ilícito de Drogas con la Participación de la Población.

Esta nueva ley parece corresponder a otro país; a otra realidad. No toma en cuenta la nueva realidad del valle del Huallaga e ignora los nuevos e impactantes elementos de la coyuntura: la marchitez de los cacaos, el éxodo campesino y la reubicación y avance de la guerrilla, siguiendo el nuevo mapa de la droga.

La Ley, además, doctrinaria y estratégicamente, es represiva y militarista. Luego de 20 años de estrepitoso fracaso de las estrategias represivas contra el narcotráfico, se insiste en los mismos errores, aunque ahora se introduzcan conceptos como «desarrollo alternativo», «participación de la población», pero el fondo es el mismo: una incorregible tentación autoritaria.

Conclusiones

Creo que estamos llegando al fin del ciclo de la cocaína en el Perú y en la región andina, luego de 20 años. Los indicios o señales del fin de este ciclo de economía son internos y externos.

Los internos son los siguientes:

1) Colapso de los precios. Los precios de la hoja, de la pasta básica (200 dólares el kilo), de la pasta básica lavada (700 dólares) siguen en declive desde agosto de 1989, cuando la pasta básica alcanzó su mayor cotización: 2.000 dólares.

No obstante, la economía peruana está fuertemente narcotizada. De acuerdo al Presidente del Banco Central de Reserva del Perú (BCR), Jorge Chávez Alvarez, el flujo de narcodólares en la economía peruana es del orden los 1.200 a 1.500 millones de dólares. Equivale al 30% de las exportaciones del país. El BCR adquiere, según el mismo funcionario, 96 millones de dólares mensuales del «mercado paralelo», pero el flujo de narcodólares es del orden de los 126 millones mensuales. La diferencia entre lo que compra al Estado y el total del flujo provoca «la flotación del dólar», un factor negativo para la política exportadora del Estado.

2) La marchitez de la coca y los cacaos.

3) La sobreproducción. Pese al derrumbe de los precios en las áreas de producción, a la marchitez, la Amazonia se cocaliza.

Se estima una superficie potencial de un millón de hectáreas para la siembra de coca en la Amazonia y para 1992 se calcula una superficie de 500.000 hectáreas. Mientras los campesinos no cuenten con alguna otra alternativa legal, seguirán sembrando coca generando reservas que terminarán por colapsar definitivamente la actividad.

Los factores externos son los siguientes:

1) El ipadú en el Brasil. El ipadú, la coca brasileña, puede desplazar a la coca del Perú y Bolivia del mercado mundial. El Brasil tiene una serie de ventajas comparativas (extensión de su territorio, mejoramiento genético de la planta, etc.) y un factor dinamizador puede ser la crisis del ciclo del oro, trasladando un millón de garimpeiros, extractores de oro, a la siembra del ipadú.

2) Crecimiento y consumo en la producción de heroína. De acuerdo con las cifras del Observatorio Geopolítico de las Drogas (OGP), la producción de heroína en el sudeste asiático está alcanzando las 3 mil toneladas métricas. En Colombia, las autoridades han reportado que en 1991 existen sembríos de amapolas, materia prima de la heroína, en una superficie de 25 mil hectáreas, iguales a la coca en la última década.

3) El debate contra el prohibicionismo de las drogas y un toma de posición a favor de la despenalización y la descriminalización del consumo gana cada día mayores espacios de la opinión pública europea. Los alcaldes de Hamburgo, Zurich, Amsterdam y Frankurt se pronunciaron, en noviembre de 1990, contra el prohibicionismo. En USA, el debate todavía se da en los ámbitos universitarios.

4) El mercado, la deidad de los liberales, finalmente se encargará de liquidar el ciclo en el Perú.

Entonces, en el Perú y sobre todo en la Amazonia, asomará un nuevo ciclo: el ciclo del oro verde de las plantas medicinales. En este nuevo ciclo, que posibilitará un desarrollo sostenido y sustentable en la Amazonia la hoja de coca podrá ser el producto de un marketing planetario: la hoja milagrosa capaz de curar los males de Occidente.

La coca entonces, de acuerdo a las milenarias leyes andinas, volverá a ser la hoja sagrada de los dioses y los hombres.